DOSSIER

Presentación

Contexto histórico de las Cortes de Cádiz, 1807-1812

Esta introducción se circunscribe a esbozar las coordenadas históricas en que tuvieron lugar las Cortes de Cádiz de 1810; desde las circunstancias en que fueron convocadas, incluyendo el procedimiento electoral efectuado para elegir a los representantes, hasta el momento en que se proclamó la Constitución española de 1812, sin dejar de señalar las consecuencias que estas Cortes Generales y Extraordinarias tuvieron para España y sus colonias, especialmente para Nueva España.

Este año resulta clave para todos los acontecimientos que vamos a recordar aquí, puesto que también estamos conmemorando el bicentenario de la Constitución que fue proclamada el 19 de marzo de 1812.

En 1807 se suscitaron muchos cambios en España, Nueva España y el resto de las colonias hispanoamericanas que darían pie a la proclamación de la Constitución de Cádiz. El 27 de octubre de ese año, Napoleón y Manuel Godoy, el Primer ministro de Carlos IV, firmaron el Tratado de Fontainebleau. Por medio de éste, que en esencia era un tratado de reparto, se formalizaba la repartición de Portugal, entre España y Francia. En efecto, a finales de dicho año de 1807, los ejércitos franco-españoles invadieron Portugal. La dinastía de los Braganza huyó a Brasil y parecía que con esto todo se había solucionado, que sólo era un reacomodo más de las fuerzas políticas que Napoleón estaba realizando en Europa. Sin embargo, desde el principio los españoles empezaron a notar signos

alarmantes, puesto que los franceses no se comportaban como aliados, sino como conquistadores.

Esta actitud se vio plenamente manifiesta en el hecho de que los franceses ocuparan lo que se llama las “plazas fuertes”, esto es, aquellas ciudades fortificadas (muchas ciudades españolas lo eran), y que dejaran a los mejores regimientos en ellas. Por otro lado, los oficiales demostraban el público desdén que sentían por los que eran sus supuestos aliados; esto culminó con el motín de Aranjuez en marzo de 1808.

Con respecto a la situación de la corte, el ministro Godoy, al percatarse de que los planes de Napoleón no coincidían con los suyos, pensó en trasladarla a Cádiz, y posiblemente a la Nueva España, lo cual debía hacerse de manera escalonada. La primera parada sería en Aranjuez y, de hecho, hasta ahí llegó la familia real, porque ocurrió el motín de marzo de 1808, que provocó la destitución de Manuel Godoy y que el rey Carlos IV fuese obligado a abdicar en favor de su hijo Fernando.

Tras la imposición de la fuerza, Fernando VII llegó a Madrid, donde recibió emisarios de Napoleón, mediante los cuales éste lo convocaba para entrevistarse con él en el norte de España. En efecto, Fernando inició una marcha hacia el norte, pasando por Valladolid, Burgos, Vitoria y San Sebastián, llegando finalmente a Bayona, Francia, donde tuvieron lugar lo que muchos historiadores españoles llaman las “vergonzosas escenas”. Se produjo la abdicación, no solamente de Carlos IV, sino también de Fernando VII, en favor de Napoleón, quien a su vez, graciosamente, designó a su hermano José Bonaparte como rey de España. Este cambio de dirección, planteó cuatro opciones a los españoles.

La primera opción fue la de los afrancesados. Esta denominación designaba a aquellos españoles que aceptaron el orden de cosas existente. Ésta no era la primera vez que había un cambio de dinastía, ni España el único país que la sufría. Un siglo atrás habían sido sustituidos los Habsburgo por los Borbones en España. Para comprender por qué a muchos españoles les pareció una alternativa, hay que considerar el prestigio que tenía Napoleón en 1808. No solamente era el gobernador, el emperador más importante de toda Europa, sino además, con las medidas que había tomado ya desde que fue cónsul, al darle un nuevo

signo a la Revolución, al firmar el Concordato con el Vaticano, al lograr la centralización del poder, etc.; institucionalizando, por decirlo de una forma, el proceso revolucionario, acrecentó dicho prestigio, que en los medios ilustrados era inmenso. Entonces, un grupo de colaboradores, algunos de Carlos III, otros de Carlos IV, consideraron que no se había perdido nada en realidad; España necesitaba ser regenerada, además Napoleón quería gobernar por medio de una constitución: la Constitución de Bayona. Así que estos hombres ilustrados vieron en él una buena posibilidad. Si lo importante era el pueblo español, la dinastía podía ser remplazada. Si el poder radicaba en esos momentos en los Bonaparte, había que seguir por ese camino. Este grupo afrancesado de personas muy ilustradas pensaba en una regeneración; creían que José Bonaparte podía ser un déspota ilustrado más; así, el componente de apoyo que tuvo de parte de Napoleón resultó fundamental.

Una segunda opción después de la Constitución de Bayona ocurrió en el mismo año de las abdicaciones. Tuvo lugar la llamada sublevación popular de Madrid, el 2 de mayo. Consistió en un levantamiento contra las fuerzas de Joaquín Murat, el gobernador de Madrid impuesto por Napoleón. Esta rebelión, que ha tenido carácter épico y que fue inmortalizado por los lienzos de Goya, parece iniciar lo que los españoles llaman “la Guerra de Independencia”. Este período independentista es el transcurrido entre 1808 y 1814, durante el cual lucharon contra los invasores franceses. El rey José se instaló provisionalmente en Madrid, pero su estancia no fue permanente, porque en varias ocasiones durante esta larga lucha se vio en la necesidad de desocupar la capital. Una vez que José Bonaparte estuvo acomodado en Madrid, con una constitución y además un grupo de colaboradores respaldándolo, la rebelión popular desencadenó dos reacciones encontradas:

La primera fue la de quienes creían en una entelequia llamada “la Constitución Histórica”, los hombres que consideraban que España debía acudir a las viejas leyes. Cabe recordar que su tradición jurídica ya era para ese momento antiquísima, venía desde las *Siete Partidas* de Alfonso X “el Sabio”. Pretendían acudir a esas tradi-

RAÚL FIGUEROA ESQUER

ciones de gobierno con Cortes estamentales, en que estarían representados los estamentos pero con un cierto sesgo modernizador. Esta acción conocida como jovellanismo se dio entre algunos seguidores del gran ilustrado Melchor Gaspar de Jovellanos, que había propuesto “Cortes del Antiguo Régimen, o bien, por estamentos”.

Sin embargo, la segunda reacción proviene del mismo Jovellanos, quien muy influido por, y admirador del sistema político británico, postulaba la creación de dos cámaras siguiendo el modelo británico: una cámara del privilegio, o la que se llama en Gran Bretaña “de los Lores” y una cámara para los diputados semejante a la “de los Comunes”, o sea, un sistema bicameral. Ésta era una forma burkeana (Edmund Burke) de actuar, ante el recelo que causaba una asamblea parlamentaria que podía recordar a los Estados Generales franceses que después se constituyeron en Asamblea Nacional y posteriormente en Asamblea Constituyente. El temor que tenían los grupos más conservadores, que veían en la postura jovellanista un peligro, hizo de esta opción un fracaso.

La tercera opción fue la convocatoria a Cortes, y para entenderla hay que saber qué pasaba en España durante ese período. En principio, José Bonaparte regía, y los franceses ocupaban el territorio de Madrid hacia el norte, pero en las demás provincias había un intenso movimiento: era una guerra que después de la batalla de Bailén (primera gran derrota del ejército napoleónico), se convirtió en una guerra de guerrillas, con las características que le son inherentes: sangrienta, con represalias, etc. En ese ambiente, el rey José trataba de gobernar en la parte dominada.

El razonamiento de los hombres constituyentes de Cádiz era que si Fernando VII había convocado a Cortes antes de su exilio, entonces, cómo se iban a transformar en unas Cortes Generales Extraordinarias —que en la terminología actual serían unas cortes constituyentes, es decir una asamblea constituyente para formar una nueva constitución. Resultan pertinentes las preguntas de cómo buscaban la legitimidad y cuáles serían las bases de esta nueva autoridad. La respuesta es algo muy sencillo: acudieron primero a las Juntas provinciales, cada provincia española formó su propia junta de defensa. Ésta fue la base inicial

de la nueva autoridad. Ellos se consideraban los primeros depositarios del poder surgido en la España de la resistencia. Estos grupos serían la base de todo un orden, que desde el principio fue nuevo, y nada tenía que ver con Cortes estamentales. Porque de las estructuras del Antiguo Régimen, la más importante de ellas, “el Consejo de Castilla”, estaba completamente desacreditada. Por ello, en las instituciones del Antiguo Régimen hubo un desplome con las abdicaciones de Fernando VII y Carlos IV, lo que produjo una reacción en cadena que llevó al desplome de todas las autoridades e hizo preciso reconstituirlas desde sus cimientos. Las Cortes Provinciales estaban formadas por los hombres de las provincias, acostumbrados a obedecer: la nobleza provinciana, los religiosos influyentes y los magistrados; eso sí, estaban divididos en cuanto a la forma de convocar a unas Cortes. Aun así, el conjunto de las juntas provinciales donde llegaron a trabajar formó lo que se llama la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino. Dicha Junta Central pretendía representar un poder único que gobernase en nombre de Fernando VII. Se formó en Aranjuez y fue presidida por un viejo ministro de Carlos III, un hombre con enorme prestigio, a quien lo único que le afectaba era su avanzada edad, José Moñino, conde de Floridablanca. Él presidió esta Junta Central Suprema y Gubernativa. Realmente sólo una parte de las provincias la obedecieron. En un período de guerra y de cambios, de regiones ocupadas por uno u otro bando, no logró tener el dominio total de la península. Pero aun así, en dieciséis meses de actuación, la Junta tomó algunas medidas muy importantes de carácter fiscal, como la contribución extraordinaria de guerra. Esto afectó inmediatamente a las rentas, no solamente de España, sino de la Nueva España. Es importante resaltar un tratado diplomático singular que llevó a cabo la Junta: el Tratado de Paz y Alianza con el Reino Unido, de enero de 1809. Hasta entonces, Francia y Gran Bretaña habían estado en guerra; la firma de este tratado de paz se llevó a cabo por un militar, un guardia marino destacadísimo, quien después tuvo un papel muy importante en Nueva España: Juan Ruiz de Apodaca. Él fue quien efectuó la negociación con Gran Bretaña para que este país, hasta entonces enemigo de los Borbones, se comprometiera a apoyar a la insurrec-

ción. Fue la obra máxima de Ruiz de Apodaca; por medio de este tratado consiguió la presencia en España del duque de Wellington para combatir a lado de los independentistas españoles.

En este mundo en ebullición, las ideologías políticas de los hombres que participaban en la cosa pública, llenos de ideas y a la vez confundidos, coincidían en la necesidad de una convocatoria a Cortes. El término se entendió básicamente de dos maneras: la institución tradicional, por estamentos, que encarara la acción contra el invasor o una Asamblea Nacional y Representativa según el modelo francés. Esta última opción finalmente fue la que se emprendió. La Junta redactó la Convocatoria para mayo de 1809 y, durante estos dieciséis meses fue perdiendo credibilidad. Se instaló en la Isla de León, actualmente San Fernando de Cádiz, y fue disuelta por los vocales y transferida a un Consejo de Regencia; así pues, en la búsqueda de una nueva legitimidad se fueron adoptando o rechazando diversas opciones políticas.

El Consejo de Regencia, conocido después como Regencia, fue presidido por el general Francisco Javier Castaños. El general Castaños fue quien venció al general Dupont en la batalla de Bailén y, por lo tanto, contaba con una gran reputación, no solamente en España, sino en Europa entera, ya que hasta esa fecha ningún ejército napoleónico había sido derrotado en una campaña abierta.

La Regencia preparó la reunión de las Cortes para el 24 de septiembre de 1810. Se trataba de organizar previamente la elección de los diputados para esta Cámara única de la Asamblea Nacional. Se realizó por medio de un procedimiento muy complicado de carácter electoral, llamado de cuarto grado o sufragio indirecto masculino. En las distintas parroquias, las juntas electorales designaban electores parroquiales; éstos escogían electores de partido, quienes, a su vez, formaban las juntas electorales de provincia que finalmente seleccionaban un diputado por cada 50 mil habitantes. En una España casi completamente ocupada, esto se realizó parcialmente; en unos lugares sí funcionó y en otros no. En el caso de Nueva España los representantes fueron elegidos en un primer momento por el virrey Francisco Javier de Lizana y Beaumont, y en uno posterior por su sucesor Francisco Javier

Venegas. Es muy interesante ver cómo, cuando la revuelta de Hidalgo estalló, paralelamente los diputados estaban siendo designados. Se trata de dos momentos que coinciden, pero los implicados no buscaban lo mismo. Revisando la nómina de los diputados destaca que, de todos los que lograron participar en las Juntas Generales y Extraordinarias, aproximadamente un 40% eran clérigos. En cuanto a los enviados novohispanos, se han localizado 28, de los cuales más de la mitad también eran clérigos. Surge entonces la pregunta de por qué hicieron una Constitución liberal, secularizante y, en algunos artículos, francamente anticlerical. La respuesta es que no se trataba de cualquier clérigo, eran los sacerdotes ilustrados, muchos de ellos ya influidos de ideas, o bien reformistas o francamente revolucionarias, y probablemente, como en el caso de Miguel Ramos Arizpe, no sean muy representativos del estamento eclesiástico. Pareciera que llegaron a ser sacerdotes sin vocación; por lo tanto, no son representativos de este grupo.

La obra constitucional fue proclamada, después de largas discusiones, el 19 de marzo de 1812. De ahí que los habitantes de Cádiz la llamaran “la Pepa”, por haber sido el día de San José; tuvo una influencia enorme, no solamente como se afirma hasta ahora, en todos los países de América Latina y desde luego en España, sino que fue el paradigma de Constitución para distintos Estados europeos. Es sorprendente la influencia que tuvo en Piamonte, en Nápoles, en Parma, y en distintos lugares a la búsqueda de este prestigio o incluso del mito de la Constitución. Dicho modelo de constitución estuvo presente prácticamente en Europa hasta 1848. Es sabido que la Constitución Mexicana de 1824 sufrió dos influencias: la básica de la Constitución de Cádiz y la de la Constitución de los Estados Unidos.

Esta tercera vía política de los hombres de Cádiz se conoce como “opción doceañista”, denominada así porque en ese año, cuyo bicentenario celebramos, fue proclamada la Constitución.

La cuarta y última opción fue la representada por las razones del pueblo español. Hay que decirlo sin ambages: éste no apoyó la Constitución debido a que alrededor del 95% eran analfabetos y porque la Constitución representaba sólo a una minoría; aunado a las maniobras y

RAÚL FIGUEROA ESQUER

felonías de Fernando VII al regresar al trono en 1814, hizo que la Constitución tuviera muy corta vigencia. Hace aproximadamente veintidós años, el rey Juan Carlos I declaró que hubiera sido mejor que nunca se hubiese suprimido.

La Constitución estuvo vigente en España únicamente dos años y aquí en Nueva España unos meses; después fue restaurada, durante el Trienio Constitucional de 1820 a 1823 y, brevemente, en 1836. Por lo tanto, lo que debemos a Cádiz es la destrucción del Antiguo Régimen, la división de poderes, por supuesto, además de que los poderes del rey fueron sumamente acotados.

En relación con América, los hombres de Cádiz acuñaron un término: “los españoles de España y de América”, implicando que tenían el derecho de constituirse. Había que abolir también muchos privilegios del Antiguo Régimen, por ejemplo los estados forales, los fueros: la costumbre hecha ley que tenían distintas regiones, que los liberales en su afán uniformador y centralista tuvieron necesariamente que atacar.

Obra de una minoría avanzada para su tiempo, podemos concluir que, para haber sido factible gobernar, se hubiera requerido entre otras cosas, de un monarca ilustrado y con muchas cualidades de las que Fernando VII carecía.

Raúl Figueroa Esquer